



NOTA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN EL SALVADOR



“El enfoque de los sistemas alimentarios basado en los derechos humanos antepone las personas a los beneficios, velando por que los mercados atiendan las necesidades sociales y obligando a los Estados a proporcionar a las personas una protección social adecuada.

El reto no consiste solo en eliminar el hambre y la malnutrición. Hay un deber para con todos los seres humanos y las generaciones futuras de cambiar los sistemas alimentarios de manera que todos los habitantes del planeta vivan con dignidad.”

**Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación
de las Naciones Unidas, Michael Fakhri, 2020**

RESUMEN

El derecho a la alimentación adecuada es el derecho a poder alimentarse con dignidad. Está reconocido en declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos, en las constituciones y leyes de diversos países. Si bien este derecho no está incluido en la actual Constitución de la República de El Salvador, es posible reformarla para reconocerlo de manera expresa en el texto. Esto contribuiría a impulsar los grandes cambios para lograr su realización efectiva para todas las personas, sin dejar a nadie atrás.

INTRODUCCIÓN

Toda persona tiene el derecho fundamental a no padecer hambre, así como el derecho a una alimentación adecuada. La importancia de promover estos derechos, como una estrategia para luchar contra el hambre y la malnutrición en todas sus formas, en lugar de fomentar simplemente la prestación de ayuda alimentaria, se refleja claramente en el mandato de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estos derechos son interdependientes e indivisibles del resto de los derechos humanos, como el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud, el derecho al agua o el derecho al medioambiente sano, por mencionar algunos.

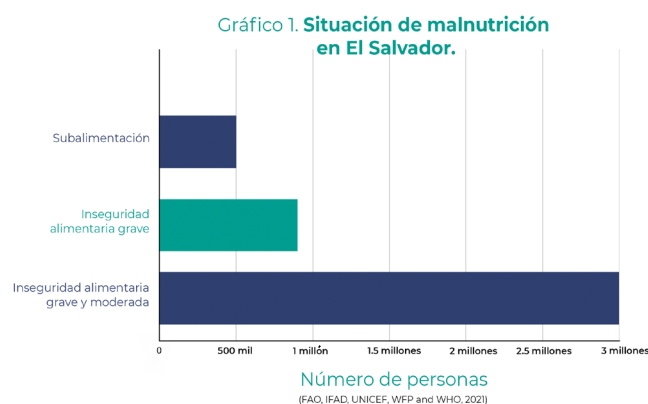
El derecho a la alimentación adecuada está en el centro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular su Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre Cero”. La FAO impulsa una serie de iniciativas para alcanzar este objetivo, destacando la asistencia técnica que

presta a los Gobiernos, al [Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe](#) (FPH ALC), al [Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe](#) (ODA-ALC) y a muchos otros actores de la academia y la sociedad civil.

La presente nota ha sido preparada con la finalidad de proporcionar elementos de información y guía que puedan ser útiles en un proceso de reforma constitucional.

LA SITUACIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MALNUTRICIÓN EN EL SALVADOR: ¿POR QUÉ DEBE IMPORTARNOS?

El Salvador enfrenta importantes retos en materia de seguridad alimentaria y nutricional, y los índices de malnutrición, tanto por déficit como por exceso, son preocupantes y afectan de manera desigual a distintos sectores de la población. Esto representa un gran desafío para el cumplimiento del derecho a la alimentación adecuada.



A nivel nacional, hay 500 mil personas en situación de subalimentación, es decir, personas cuyo consumo habitual de alimentos es insuficiente para proporcionarles la cantidad de energía alimentaria necesaria para llevar una vida normal, activa y sana. Asimismo, alrededor de 3 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria grave y moderada. De estas, 900 mil personas sufren de inseguridad alimentaria grave, es decir, no consumen alimentos durante un día o más (FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, 2021).

A mayores, según el último Análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF (Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases), 684 mil personas (10% de la población analizada), se encuentran en crisis alimentaria o peor (Fase 3 o peor de la CIF). Estas personas son capaces de satisfacer sus necesidades alimentarias solo mediante el agotamiento de sus medios de vida o recurriendo a estrategias de afrontamiento consideradas de crisis. El departamento más afectado es el de Ahuachapán, ubicado en la zona occidental del país (PROGRESAN-SICA, 2020).

Además, existen importantes brechas de género en El Salvador, ya que tanto la inseguridad alimentaria como la pobreza afectan más a las mujeres que a los hombres. Así, la inseguridad alimentaria moderada o grave afecta al 35,6 % de los hombres frente a un 45,7% de las mujeres (FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF, 2020). Algo similar ocurre con la pobreza.²

En cuanto a la malnutrición por déficit, si bien la desnutrición crónica de las niñas y niños menores de 5 años ha ido disminuyendo en el tiempo, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud de 2014, ella afecta a un 13,6% de dichos menores. Al mismo tiempo, un 21% sufre de anemia. En el grupo de menores de 2 años, esta afecta mayormente a las niñas y niños del área rural (30,1%), comparado con los del área urbana (23%) (MINSAL, 2014). En el caso de los escolares de primer grado, la desnutrición crónica afecta a un 9,05% (CONASAN, 2017).

¹ La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases es una herramienta de medición de la seguridad alimentaria, que contempla cinco fases: Fase 1 (Mínima), Fase 2 (Acentuada), Fase 3 (Crisis), Fase 4 (Emergencia) y Fase 5 (Hambruna). Para una descripción detallada de cada una de ellas, puede consultar el [Manual Técnico](http://www.fao.org/3/i3000s/i3000s.pdf) www.fao.org/3/i3000s/i3000s.pdf

² Véase el índice de feminidad de la pobreza en hogares pobres del Observatorio de la Igualdad de género de la CEPAL disponible en: <https://oig.cepal.org/es/indicadores/indice-feminidad-hogares-pobres>.

Gráfico 2. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en El Salvador.



Por otro lado, las cifras de sobrepeso y obesidad van en aumento. Según la encuesta nacional de enfermedades crónicas no transmisibles del 2015, la población mayor de 20 años de El Salvador tiene una prevalencia de un 65,2% de sobrepeso y obesidad (MINSAL, 2017). Esta situación se repite en otros grupos de edad: 30,83% de los escolares de primer grado (CONASAN, 2017) y 38,4% de los adolescentes entre 13 y 15 años (MINSAL, 2013). Aquí también existe una importante brecha de género ya que, en lo referido a la obesidad, la prevalencia en mujeres mayores de 20 años fue de 33,2% frente a un 19,5% en hombres (MINSAL, 2017). Todo esto va unido a un bajo consumo de frutas y verduras (93,8%), un elevado consumo de

bebidas azucaradas (81%) y un alto porcentaje de sedentarismo en las personas adultas (39,9%) (MINSAL, 2017).

Gráfico 3. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de edad

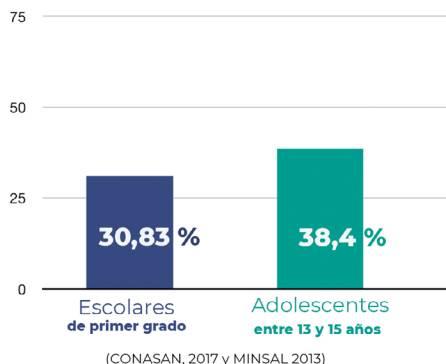
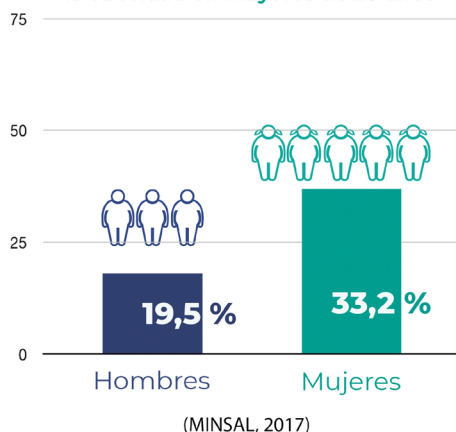


Gráfico 4. Brecha de género referida a la obesidad en mayores de 20 años



Estos desafíos nutricionales son complejos y multidimensionales. En particular, las dietas deficientes y la malnutrición tienen efectos negativos en la salud de las niñas y niños, su rendimiento escolar y su capacidad para aprender. Además, los efectos de la desnutrición infantil se asocian con repitencia y deserción escolar. En ese sentido, los **programas de alimentación** escolar son ampliamente reconocidos como instrumentos claves para la realización de los derechos de niñas y niños.

Adicionalmente, la malnutrición tiene costos importantes para el país. En el año 2017, los costos atribuibles a la desnutrición ascendieron a 1 704,7 millones de dólares. Esto representó el 6,9% del producto interno bruto (PIB) de ese año (CEPAL, INCAP, WFP, Gobierno de El Salvador, 2019). En el caso del sobrepeso y la obesidad, sus efectos se asocian con un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las hiperlipidemias, entre otras. Los costos atribuibles a dichas enfermedades fueron de 854,5 millones de dólares, lo que corresponde al 3,4% del PIB. En total, los costos de la doble carga de la malnutrición ese año ascendieron a 2 559,2 millones de dólares, lo que es igual al 10,3% del PIB del país (CEPAL, INCAP, WFP, Gobierno de El Salvador, 2019). Al año 2016, la probabilidad de muerte prematura (entre los 30 y 70 años de edad) debido a una de esas enfermedades, era del 14% (FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF, 2020).

En este contexto, es evidente que la pandemia del COVID-19 puede agravar de forma prolongada esta situación, especialmente en los hogares con condiciones preexistentes de vulnerabilidad y privación de múltiples dimensiones del bienestar. En términos de pobreza monetaria un 26,2% de los hogares de El Salvador presentan esa condición. De ellos, el 8,6% presenta pobreza extrema (hogares que con su ingreso per cápita no alcanzaron a cubrir el costo per cápita de la Canasta Básica Alimentaria-CBA) y un 17,6% pobreza relativa (hogares que con su ingreso per cápita no alcanzan a cubrir el costo de la CBA ampliada o dos veces el valor de la CBA). En términos de pobreza multidimensional, un 27,2 % de los hogares vive en esta condición, lo que equivale a 1,9 millones de personas (MINEC, 2020).

Es indudable que la inseguridad alimentaria y la malnutrición tienen consecuencias individuales y colectivas, impactando la situación sanitaria general y la economía del país. Por lo tanto, reducirlas y llevar a la práctica el derecho a la alimentación adecuada genera beneficios socioeconómicos tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto. Las personas que tienen seguridad alimentaria son más productivas, se enferman con menos frecuencia y tienden a invertir más en el futuro. Esto contribuye, además, a reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Por lo anterior, son necesarias políticas públicas integrales que promuevan un mayor acceso económico, disponibilidad y estabilidad de alimentos saludables para todas las personas y en todos los sectores geográficos del país. También son necesarias políticas que fomenten entornos y hábitos alimentarios más saludables, así como la reducción de las brechas socioeconómicas, étnicas y de género.

¿QUÉ ES EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA?

*El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y garantice una vida síquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna (**Naciones Unidas: Comisión de Derechos Humanos, 2001**).*

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

DISPONIBILIDAD



ESTABILIDAD



ACCESIBILIDAD



SOSTENIBILIDAD



ADECUACIÓN



Este derecho tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos y se traduce en obligaciones para todos los órganos del Estado. Estos tienen la obligación de respetar, proteger, promover y facilitar el derecho a la alimentación. Los principios de no discriminación, participación, transparencia, dignidad humana, empoderamiento, rendición de cuentas y Estado de derecho forman parte integrante de este derecho. Algunas obligaciones son de carácter inmediato y otras deberán cumplirse de manera progresiva destinando el máximo de los recursos disponibles (FAO, 2010).

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General No. 12 de 1999, el derecho a la alimentación adecuada comprende: *“la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; [y] la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos”* (Naciones Unidas: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1999).

La **disponibilidad** se refiere a la posibilidad de alimentarse directamente de lo que produce la tierra u otros recursos naturales, o a través de un sistema eficaz de distribución, procesamiento y comercialización que permita trasladar los alimentos desde el lugar de producción hasta donde sea necesario, según la demanda. Para esto, también es necesario contar con una **estabilidad** con respecto a la oferta de alimentos y al acceso a los mismos. En efecto, el derecho a la alimentación implica que los individuos dispongan de **acceso** a alimentos adecuados, tanto en términos económicos como físicos. Tanto la disponibilidad de alimentos como el acceso sostenible vienen determinados por las condiciones de **sostenibilidad** ambiental que permita garantizar la disponibilidad de alimentos suficientes para las generaciones actuales y futuras (Naciones Unidas: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1999).

Si bien tradicionalmente se ha asociado el derecho a la alimentación con el derecho fundamental a no padecer hambre, en la actualidad es imprescindible abordar también el problema de la malnutrición por exceso y el acceso físico y económico desigual a una alimentación saludable.

El concepto de **adecuación** reviste especial importancia pues pone en relieve que los alimentos debensersuficientespara satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, nutricionalmente adecuados, sin sustancias nocivas -deben cumplir ciertas normas mínimas de inocuidad- y aceptables para una cultura o consumidores determinados (Naciones Unidas: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1999).

La adecuación y valor nutricional de la alimentación son fundamentales y tienen una relación estrecha con el derecho a la salud. Todas las personas tienen derecho a una alimentación nutritiva y saludable, que sea variada y contenga alimentos frescos, como frutas y verduras de estación o productos del mar. Estos alimentos provienen en su mayoría de la agricultura familiar, siendo comercializados a través de mercados y ferias libres. Por ello, respaldar a los pequeños agricultores a través de políticas e inversiones contribuye a aliviar el hambre y la pobreza, que es prevalente en las zonas rurales. Asimismo, se sabe que la ingesta de productos alimentarios que contienen niveles excesivos de nutrientes críticos, como azúcares, sodio, grasas saturadas y ácidos grasos trans, plantea un mayor riesgo de obesidad y enfermedades no transmisibles. Es indispensable disminuir la disponibilidad, el acceso y el consumo de estos productos en pos de alimentos saludables.

El derecho a la alimentación no es el derecho a ser alimentado sino, primordialmente, el derecho a poder alimentarse con dignidad. Sólo cuando una persona no pueda, por razones ajenas a su voluntad, proveer a su propio sustento, debe el Estado proporcionarle alimentación o los medios para adquirirla. Focalizar la atención en la población que vive en situación de pobreza contribuye a su vez al crecimiento económico y al desarrollo social.

Respecto de los pueblos indígenas, los Estados tienen obligaciones especiales. Estas incluyen respetar sus estilos de vida tradicionales, fortalecer sus sistemas de alimentación tradicionales y proteger sus actividades de subsistencia como la caza, la pesca y la recolección. Además, este derecho tiene para ellos una importante dimensión colectiva, que incluye una dimensión cultural. El vínculo entre el territorio y los recursos naturales, la producción de alimentos y su consumo, es fundamental para ellos y debe ser respetado.

También es relevante considerar las necesidades alimentarias y nutricionales especiales de las personas según su sexo, edad, estado físico, y otras condiciones, prestando particular atención a las mujeres embarazadas y en período de lactancia, los niños, niñas y adolescentes y las personas mayores. Por ejemplo, en el caso de las mujeres en edad fértil y embarazadas, es necesario atender eventuales deficiencias de hierro u otro tipo de nutrientes. Es por esto, que las calorías no son la única consideración, sino el contenido y balance entre macro (proteínas, carbohidratos, grasas) y micronutrientes (vitaminas y minerales) es fundamental. En todo caso, respecto de la situación de las mujeres en general, es necesario comprender la naturaleza entramada de las desigualdades de seguridad alimentaria y nutricional, y diseñar e implementar políticas, programas y proyectos orientados a tratar de manera diferenciada los requerimientos de poblaciones diversas (Brito Bruno, C. y Ivanovic Willumsen, C. 2019).

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece, en su artículo 25 (1), que *“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”*. Por su parte, la **Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre**, del mismo año, reconoce el derecho a la alimentación como parte integral del derecho a la salud y el bienestar (artículo XI).

El derecho a una alimentación adecuada se reitera desde entonces en declaraciones, tratados y acuerdos internacionales. **El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**, de 1966, lo reconoce en su artículo 11.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 1966.

Artículo 11

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

(a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

(b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.

Este pacto es un tratado jurídicamente vinculante para sus 171 Estados Partes, incluyendo El Salvador. El derecho a la alimentación también se reconoce en la [Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer \(artículo 12\)](#), la [Convención de los Derechos con las Personas con Discapacidad \(artículos 25 y 28\)](#) y la [Convención sobre los Derechos del Niño \(artículos 24 y 27\)](#), de los que El Salvador también es Parte.

En el ámbito regional, el [Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales](#) de 1988 reconoce explícitamente el derecho a la alimentación en su artículo 12. El Salvador no sólo es Parte de este tratado, sino que además éste es conocido como [“Protocolo de San Salvador”](#) en honor a su lugar de adopción.

El 2004, los Estados Miembros de la FAO aprobaron las [Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional](#). Las Directrices ofrecen una orientación detallada, persuasiva y clara para implementar el derecho a una alimentación adecuada. Asimismo, recomiendan una serie de medidas, incluyendo acciones constitucionales y legislativas, como también marcos institucionales articulados para abordar las dimensiones intersectoriales del derecho a la alimentación.

En 2021, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial aprobó las [Directrices Voluntarias sobre los Sistemas Alimentarios y la Nutrición](#). Este instrumento proporciona orientación a los gobiernos, instituciones especializadas y otras partes interesadas acerca de las políticas, las inversiones responsables y los mecanismos institucionales adecuados para abordar las principales causas de la malnutrición en todas sus formas desde una perspectiva basada en los sistemas alimentarios.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RECONOCER EL DERECHO A LA ALIMENTACION ADECUADA DE MANERA EXPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN?

Los países que en las últimas décadas han incorporado el derecho a la alimentación a sus constituciones lo han hecho como resultado de un pacto social que permita unir a la sociedad y superar situaciones de desigualdad y exclusión. También, porque es un mecanismo que da prioridad a las políticas que han demostrado la capacidad de generar desarrollo socioeconómico y contribuir al bienestar nacional.

Al reconocer el derecho a la alimentación en la carta magna, las responsabilidades de todos los actores son más claras y visibles. Se incrementan los niveles de cumplimiento y atención a las políticas públicas necesarias para llevar el derecho a la práctica y se fomenta su implementación por todos los órganos del Estado y en todos los niveles de gobierno (federal, estadual y local).

Asimismo, como la Constitución es la norma suprema o de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de un Estado, todas las demás normas deben respetarla e interpretarse conforme a ella. Esto permite que las políticas y legislación que se adopten para dar protección y fortalecer el derecho a la alimentación sean más sólidas, difíciles de impugnar y durables en el tiempo. A esto debe sumarse una institucionalidad sólida, que permita dar aplicación al derecho, y el establecimiento de recursos procesales constitucionales que permitan a las personas exigir su cumplimiento.

Sin embargo, el reconocimiento constitucional no es suficiente por sí solo. Para erradicar la malnutrición en todas sus formas es necesario contar con políticas públicas integrales, legislación apropiada y la asignación presupuestaria de recursos.

RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Muchos países de América Latina y el Caribe hacen referencia al derecho a una alimentación adecuada en sus constituciones. El reconocimiento constitucional puede ser explícito y directo como sucede, por ejemplo, en el Estado Plurinacional de Bolivia (artículo 16) y México (artículo 4.3); puede ser implícito, en el marco de una interpretación más amplia de otros derechos humanos, como ocurre en Argentina (artículo 14. bis 1) o Perú (artículos 2, 10 y 24); o bien puede tener lugar a través del reconocimiento del derecho a la alimentación como meta o principio rector de las políticas de Estado, como es el caso de República Dominicana (artículos 54 y 57) (FAO, 2020a).

Por lo que respecta al reconocimiento explícito, en la actualidad **15 Estados** de América Latina y el Caribe consagran el derecho humano a la alimentación adecuada en sus constituciones de forma explícita, sea para todas las personas, o para grupos específicos de la población como niños y niñas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas desplazadas o personas privadas de su libertad. Estos países son: **Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Suriname** (FAO, 2020b).

*Ejemplos de disposiciones constitucionales que reconocen de manera explícita el derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe para todas las personas*³



FUENTE: Mapa de América Latina y el Caribe, modificado para cumplir con Mapa del Mundo de Naciones Unidas, 2020⁴

Además, varios países establecen acciones o recursos procesales constitucionales o de amparo mediante los cuales las personas pueden hacer valer el derecho a la alimentación adecuada ante los tribunales de justicia.

También cabe destacar las normas que otorgan una mayor protección a la producción de alimentos y las actividades asociadas a la misma, como sucede en el artículo 65 de la Constitución de Colombia.

3 Si bien se destacan tres países a modo de ejemplo, son nueve las constituciones de América Latina y el Caribe que reconocen de forma explícita el derecho a la alimentación para todas las personas, mediante disposiciones similares a los ejemplos elegidos para el cuadro: Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Guyana, Haití, México, Nicaragua y Suriname.

4 Las fronteras mostradas y los nombres y las designaciones empleados en este mapa no implican, por parte de la FAO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan fronteras aproximadas respecto de las cuales puede que no haya todavía pleno acuerdo.

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN EL TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN SALVADOREÑA

El derecho a la alimentación adecuada no se encuentra reconocido de manera explícita en la Constitución de la República de El Salvador. Sin embargo, la carta magna puede ser reformada según el proceso establecido en el artículo 248, lo que permitiría incluir este derecho expresamente en su texto. Una reforma constitucional sólo puede ser propuesta por un número no menor a 10 diputados de la Asamblea Legislativa y debe ser aprobada con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. La reforma debe ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los diputados electos. Una vez ratificada, se emite el decreto correspondiente y se publica en el Diario Oficial, momento en el cual, por regla general, entra en vigencia.

Todos los tratados internacionales de derechos humanos de los que El Salvador es Parte, y en esta materia, el **Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo de San Salvador** cobran especial importancia. Estos tratados forman parte del marco jurídico nacional, según lo dispone el artículo 144 de la Constitución.

Incorporar el derecho a la alimentación adecuada de manera explícita en la Constitución permitiría darle visibilidad y movilizar la voluntad política para su realización. Sentaría bases sólidas al más alto nivel para que el Estado adopte las políticas y legislación necesarias para enfrentar los desafíos asociados a la realización de este derecho para todas las personas, sin dejar a nadie atrás.

CONCLUSIONES

El derecho a la alimentación adecuada está reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos que son vinculantes para El Salvador. Estas obligaciones deben ser consideradas en todo proceso de reforma de la Constitución.

Si bien el derecho a la alimentación se ejerce a nivel individual, tiene también dimensiones colectivas. Por lo tanto, las personas, además de disponer de los medios para acceder física y económicamente a una alimentación adecuada, deben contar con entornos alimentarios y sistemas agroalimentarios que propicien el acceso a alimentos suficientes, saludables y nutritivos para todos, sin dejar a nadie atrás, como las niñas y niños, las mujeres y las poblaciones rurales, entre otros.

Desde un enfoque de derechos, el rol del Estado en esta materia es clave, ya que se requieren políticas públicas integrales y cambios estructurales en distintos ámbitos, incluyendo el plano legislativo, que remuevan los obstáculos que impiden la realización del derecho e incidan en los factores de desigualdad estructural que afectan su ejercicio. Pero su realización efectiva requiere de los esfuerzos conjuntos de todos los sectores de la sociedad.

Los países que reconocen este derecho en sus constituciones cuentan con mejores herramientas para hacer frente a los problemas de malnutrición que les afectan. Por ello, invitamos al poder constituyente salvadoreño a reconocer, en sus propios términos y ajustado a su propia realidad, el derecho a la alimentación adecuada para todas las personas, así como a organizar el aparato del Estado y establecer una acción o recurso procesal constitucional que permita garantizar su efectividad.

El reconocimiento del derecho a la alimentación en la Constitución es una de las acciones normativas más importantes y perdurables que se pueden emprender a nivel nacional y puede traer importantes beneficios políticos y socioeconómicos al país. Nadie quiere que otros mueran de hambre o como consecuencia de la inseguridad alimentaria o la malnutrición por exceso.

REFERENCIAS:

Asamblea Legislativa de El Salvador (Asamblea Constituyente) 1983. Constitución de la República de El Salvador. San Salvador, El Salvador. (disponible en: https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf). Acceso: 16 de agosto de 2021.

Bottan, N., Hoffmann, B. y Vera-Cossio, D. 2020. IDB/Cornell Coronavirus Survey: Methodological Notes. 172 pp. (disponible en: <https://publications.iadb.org/en/idbcornell-coronavirus-survey>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

CEPAL. 2020. Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones. 26 pp. (disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf). Acceso: 16 de agosto de 2021.

CEPAL. 2021. Índice de feminidad de la pobreza en hogares pobres. (disponible en: <https://oig.cepal.org/es/indicadores/indice-feminidad-hogares-pobres>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

CEPAL, INCAP, WFP, Gobierno de El Salvador. 2019. El Costo de la Doble Carga de la Malnutrición: Impacto Social y Económico. El Salvador. (disponible en: <http://incap.int/index.php/es/listado-de-documentos/prensa/notas-para-los-medios-informativos/341-el-costo-de-la-doble-carga-de-malnutricion-impacto-economico-y-social-el-salvador-2019/file>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

El Salvador. Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 2017. IV Censo Nacional de Talla; I Censo Nacional de Peso en escolares de primer grado de El Salvador. Mayo 2016. San Salvador, El Salvador, 258 pp. (disponible en: <http://cedesan.conasan.gob.sv/index.php/repository/func-startdown/261/>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

El Salvador. Ministerio de Economía. 2020. EHPM: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2020. Delgado, El Salvador (disponible en: <http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

El Salvador. Ministerio de Salud. 2013. Encuesta Mundial de Salud Escolar. Resultados. El Salvador, 2013. San Salvador, El Salvador, 43 pp. (disponible en: <https://www.who.int/ncds/surveillance/gshs/El-Salvador-GSHS-2013-report.pdf>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

El Salvador. Ministerio de Salud. 2014. Encuesta Nacional de Salud de Indicadores Múltiples por Conglomerados. 539 pp. (disponible en: http://ins.salud.gob.sv/wp-content/uploads/2017/11/Encuesta_MICS.pdf). Acceso: 16 de agosto de 2021.

El Salvador. Ministerio de Salud. 2017. Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas no transmisibles en Población Adulta de El Salvador. ENECA ELS 2015. San Salvador, El Salvador, 348 pp. (disponible en: <http://ins.salud.gob.sv/wp-content/uploads/2017/12/ENECA-2015.pdf>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

FAO. 2010. Guía para legislar sobre el derecho a la alimentación. Libro 1. Roma, Italia. 343 pp. (disponible en: <http://www.fao.org/3/i0815s/i0815s00.htm>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

FAO. 2020a. Nota de orientación jurídica para parlamentarios en América Latina y el Caribe N° 1 "El derecho a una alimentación adecuada en las constituciones". 7 pp. (disponible en: <http://www.fao.org/3/cb0448es/CB0448ES.pdf>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

FAO. 2020b. Base de datos El reconocimiento constitucional del derecho a una alimentación adecuada. En: El derecho a la alimentación en el mundo. Roma, Italia. (disponible en: <http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/es/>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2021. The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all. Rome, FAO. 240 pp. (disponible en: <http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4474en>). Acceso: 16 de agosto 2021.

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. 2020. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020. Transformación de los sistemas alimentarios para que promuevan dietas asequibles y saludables. Roma, FAO. 348 pp. (disponible en: <https://doi.org/10.4060/ca9692es>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF. 2020. Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2020. Santiago de Chile, FAO. 150 pp. (disponible en: <https://doi.org/10.4060/cb2242es>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

FAO/FSNAU. 2006. Marco integrado de clasificación de la seguridad alimentaria y la fase humanitaria: Manual técnico versión 1. Nairobi Serie técnica IV FAO/FSNAU 133 pp. (disponible en: <http://www.fao.org/3/i3000s/i3000s.pdf>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

Naciones Unidas. 2020. Mapa del Mundo. (disponible en: <https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

Naciones Unidas: Comisión de Derechos Humanos. 2001. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler. E/CN.4/2001/53, 57° período de sesiones. Ginebra. 32 pp. (disponible en: <https://digitallibrary.un.org/record/435941?ln=es>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

Naciones Unidas: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1999. Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 12. El derecho a una alimentación adecuada (artículo 11). E/C.12/1999/5, 20° período de sesiones. Ginebra. 9 pp. (disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf>). Acceso: 16 de agosto de 2021.

PROGRESAN-SICA. 2020. Análisis de Inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF Noviembre 2020-Agosto 2021. (disponible en: https://www.sica.int/documentos/informe-del-analisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-de-la-cif-el-salvador-noviembre-2020-agosto-2021_1_125920.html). Acceso: 16 de agosto de 2021.

AGRADECIMIENTOS

Esta nota de orientación jurídica fue elaborada por Manuela Cuvi Rodríguez, Oficial Jurista del Servicio de Derecho para el Desarrollo de la Oficina Jurídica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); Carolina Flores Barros, Especialista Jurista del mismo servicio; Reina Osorio Guevara, Especialista en Estrategias de Educación Alimentaria y Nutricional de la Representación de FAO en El Salvador, y Oscar Rivas Vega, Especialista en Alimentación y Nutrición de la misma representación.

CONTACTO

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
<http://www.fao.org/americas/es/>
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Santiago de Chile, Chile

Cita requerida:

FAO. 2021. *El reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación adecuada en El Salvador*. Santiago Chile. <https://doi.org/10.4060/cb8050es>



Algunos derechos reservados. Este obra está
bajo una licencia de [CC BY-NC-SA 3.0 IGO](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)